

Debate

CONSEJO EDITORIAL

José Sánchez-Parga, Alberto Acosta, José Laso Ribadeneira, Simón Espinosa, Diego Cornejo Menacho, Manuel Chiriboga, Fredy Rivera, Jaime Borja Torres, Marco Romero.

DIRECTOR

Francisco Rhon Dávila
Director Ejecutivo CAAP

EDITOR

Fredy Rivera Vélez

ECUADOR DEBATE

Es una publicación periódica del Centro Andino de Acción Popular CAAP, que aparece tres veces al año. La información que se publica es canalizada por los miembros del Consejo Editorial. Las opiniones y comentarios expresados en nuestras páginas son de exclusiva responsabilidad de quien los suscribe y no, necesariamente, de ECUADOR DEBATE.

SUSCRIPCIONES

Valor anual, tres números:

EXTERIOR: US\$. 18

ECUADOR: S/. 29.000

EJEMPLAR SUELTO: EXTERIOR US\$. 6

EJEMPLAR SUELTO: ECUADOR S/. 10.000

ECUADOR DEBATE

Apartado Aéreo 17-15-00173-B Quito, Ecuador

Redacción: Diego Martín de Utreras 733 y Selva Alegre, Quito.

Se autoriza la reproducción total y parcial de nuestra información, siempre y cuando se cite expresamente como fuente a ECUADOR DEBATE.

PORTADA

Magenta Diseño Gráfico

ECUADOR DEBATE

37

Quito - Ecuador, abril de 1996

EDITORIAL

COYUNTURA

Nacional: La fragilidad financiera marcará la transición / 5 - 18

Marco Romero

Política: Realidad del ajuste define las opciones políticas / 19 - 28

Hemán Ibarra

Conflictividad: El conflicto sociopolítico junio 1995 - febrero 1996 / 29 - 33

Internacional: El dumping "social" versus el dumping "estatal" / 35 - 48

Wilma Salgado

TEMA CENTRAL

Apuntes para una economía política del ajuste neoliberal / 49 - 65

Alberto Acosta

El ajuste: Reflexiones teóricas desde nuestra realidad / 66 - 81

Jeannette Sánchez

Significados del ajuste estructural en el Ecuador / 82 - 103

Ruth Lucio Romero

Ajuste estructural, pobreza y participación popular / 104 - 130

Humberto Campodónico

Ajustes, coaliciones y reformas en los años 90 / 131 - 143

Adrián Acosta

Desidia electoral: Síndrome de ajustes frustrados; las elecciones de 1994 / 144 - 161

Roberto Santana

ENTREVISTA

Crisis y ajuste en América Latina: los puntos débiles de la experiencia vivida / 163 - 170

Entrevista hecha por Jeannete Sánchez y Mauricio León a Albert Berry

PUBLICACIONES RECIBIDAS

DEBATE AGRARIO

Biodiversidad, biotecnología y desarrollo sustentable en la amazonia

175 - 195

Antonio Brack Egg

Aspectos político-sociales del manejo de los recursos naturales / 196 - 209

Leonard Field

ANALISIS

Me manda López. La doble vida del clientelismo político / 211 - 229

Javier Auyero

El discurso del poder / 230 - 237

Pablo Dávalos

CRITICA BIBLIOGRAFICA

Imágenes e imagineros. Representaciones de los indígenas ecuatorianos,

Siglos XIX y XX / 239 - 241

Autores: Blanca Muratorio, Jill Fizzell, Anne Christine Taylor, Andrés Guerrero y
Laura Rival

Comentarios de Fredy Rivera V.

Desidia electoral: Síndrome de ajustes frustrados; las elecciones de 1994

Roberto Santana (*)

A quince años del retorno democrático y a una docena de años del inicio de las políticas de reajuste estructural, conviene preguntarse si los resultados de las elecciones de mayo de 1994 (que precederán a las presidenciales de 1996), salieron o no de lo ordinario, al interior de un juego político que, por muchas evidencias, parece interesar cada vez menos a una gran parte de la población ecuatoriana.

Sin lugar a dudas esas elecciones representaron una apuesta importante para el gobierno neo-liberal del presidente Durán Ballén quien había accedido a la primera magistratura en un clima de escepticismo ciudadano, marcado por una fuerte crisis de representación de los partidos políticos, la degradación de la imagen del Estado y la ausencia de debate sobre opciones estratégicas para el país. Todo ello agravado por denuncias frecuentes de corrupción en las altas esferas del gobierno y de la economía. El presidente no había podido, o no había sabido, modificar los datos de base de un impasse evidente en la conducción del país. Contrariamente y por lo mismo, los sondeos pre-electorales señalaban que la cita de mayo interesaba cada vez

menos a una población que, desmoralizada, había perdido la confianza en los políticos y en el Estado, y se volcaba por entero a imaginar los medios de una subsistencia cada vez más difícil.

Los observadores han insistido, y con justa razón, en el grave y notorio desinterés del electorado, interpretándolo como un signo de reprobación al funcionamiento del sistema político¹; pero en su significación más general, los resultados electorales pueden ser considerados como un hecho perfectamente banal, que se repite obstinadamente en la vida política ecuatoriana: una vez más el electorado había decidido "castigar" a los políticos en el gobierno. Es por ello que tiene mayor interés una puesta en perspectiva de

* CNRS / Université de Toulouse-Le Mirail

1. Ecuador Debate, en su número 32 de 1994, contiene diversos artículos a las elecciones de mayo.

los datos electorales de mayo para entenderlos como parte de un largo período de transición democrática marcado por una sucesión de alternancias políticas sin gloria (de centro-populista, de centro, de derecha, de socialdemocracia y de derecha otra vez), cuyo balance general puede ser considerado como muy negativo tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista de la situación económica y social. El gobierno de Durán Ballén es tributario de una historia de casi quince años de crisis y es por ello, que conviene comenzar por allí.

UN CONTEXTO DE CRISIS DURABLE

Más allá de toda otra consideración, hay una constante que marca a fuego los años de "retorno democrático": la tensión política permanente entre Congreso y Presidencia de la república y entre Presidente de la república y mayorías parlamentarias. De hecho, los gobiernos sucesivos han funcionado en un contexto de "lucha de guerrillas", algunas veces enfrentados a situaciones dramáticas donde el país escapaba por milímetros a la ruptura institucional. Las presidencias sucesivas terminaron desgastándose en el ejercicio interminable de composición y de consolidación de mayorías políticas, las cuales resultaron por lo general efímeras. Por su lado, el Congreso Nacional no escatimó esfuerzos para neutralizar al Poder Ejecutivo, buscando por esa vía no tanto la solución de los problemas nacionales, sino más bien favoreciendo los intereses particulares de sectores minoritarios.

Fue así como la presidencia de Jaime Roldós (1979-1981), fuera de marcar el inicio de la transición demo-

crática, pasó a la historia por así decirlo, bajo el signo de la "pugna de poderes", desencadenada al interior mismo del partido gobernante (Concentración de Fuerzas Populares). La disputa en su aspecto más visible se centró en torno a la cuestión de saber quién debía monopolizar el liderazgo político, si el jefe del gobierno o el presidente del Congreso. Más allá de los lazos de tirante parentesco que unían a los dos personajes centrales y más allá de los "resquicios" institucionales permitidos por la nueva Constitución, tema sobre el cual volveremos, no era misterio que detrás de la pugna se escondían los intereses de diferentes clanes familiares controlando la economía de la región de la Costa. En suma, la administración Roldós fue condenada a la defensiva, no pudiendo sino insinuar algunas aperturas estratégicamente interesantes.

El presidente Oswaldo Hurtado, que sucede a Jaime Roldós luego de su muerte, iba a heredar una situación casi insostenible, debiendo soportar una tensión política todavía más grave por el hecho mismo de pertenecer al partido minoritario en la alianza gobernante, es decir, la Democracia Popular. Por lo mismo, la mayor parte de su tiempo debió dedicarla a la creación y recreación de alianzas parlamentarias, ejercicio en el cual hizo uso ampliado de la atribución de puestos ministeriales, práctica en apariencia más eficaz en la búsqueda de consensos: de 1979 a 1983, 58 personas pasaron por 13 ministerios; la mayoría de los cambios tuvieron lugar bajo el corto período del presidente Hurtado.

La suerte del gobierno de Hurtado es tanto más lamentable cuanto que su política de estabilización y de austeri-

dad parecía bien fundada para la época y su espíritu era previsor. Oswaldo Hurtado tiene el mérito de haber sido uno de los primeros ecuatorianos en tener una percepción de la amenaza de crisis en los comienzos de los años 80 y en haber alertado al país acerca del término de la prosperidad petrolera y de las implicaciones de la crisis mundial sobre la economía del país. Sin embargo, en ausencia de consenso político, las necesarias medidas de devaluación del sucre así como aquellas destinadas a la reducción del déficit fiscal, la eliminación de los subsidios a ciertas actividades, o a la limitación de los aumentos salariales, no podían sino decidirse en un círculo reducido de responsables y no podían por lo mismo evitar un cierto sesgo autoritario, lo que desencadenó fuertes oposiciones. Las medidas fueron combatidas encarnizadamente y a finales del mandato presidencial, empresarios y organizaciones sindicales se encontraron en el mismo frente de la protesta antigubernamental. Un comportamiento diferente de los actores de esa época pudo haber evitado al Ecuador el triste rol actual de ser uno de los países del Continente que están más a la zaga en su reconstrucción económica.

En ausencia de consenso centrista para implementar la nueva política económica, la presidencia de derecha de Febres Cordero (1984-1988) se sintió autorizada a poner en práctica un programa de perfil neo-liberal exacerbado. Pero muy pronto iba a tener la prueba de su ausencia de realismo, bajo la forma de una oposición tenaz de todo el centro y de toda la izquierda, haciendo que las contradicciones políticas asuman así el carácter de insolubles: el presidente trató de gobernar los golpes

de autoridad y echando mano a menudo a procedimientos ilegítimos con el fin de minar el bloque de oposición (coimas, condescendencia con actos de prevaricación cometidos por altos funcionarios, prebendas públicas, etc.) mientras que ésta puso en práctica una estrategia cerrada de bloqueo parlamentario, recurriendo incluso al "lock out", negándose literalmente a funcionar durante largas semanas y meses. En medio de una situación de confusión extrema, los dos poderes del Estado habían perdido parte de su legitimidad; no puede por tanto extrañar que haya tenido lugar la tentativa del golpe de Estado de marzo de 1986 encabezada por el general de aviación Frank Vargas Pazzos, ex jefe del estado mayor de las fuerzas armadas, cuya rebelión contó con el apoyo de la base aérea de Manta, provincia de Manabí. La ruptura institucional fue en aquella coyuntura, muy difícilmente evitada.

El gobierno conservador iba a terminar en completa bancarrota, asediado por movilizaciones sociales contestatarias, de gran envergadura y amplitud. Su política económica fundada sobre un liberalismo de los más ortodoxos se había saldado en la práctica con resultados muy negativos: el déficit presupuestario representaba alrededor del 5% del PIB, la deuda externa, del orden de siete millones de dólares al comienzo del mandato presidencial, había pasado a diez millones, el ingreso por habitante había descendido de un 6% como media anual, la inflación sobrepasaba el 50%... Es cierto que el período fue afectado por una caída importante de los precios del petróleo y por catástrofes naturales de gran intensidad, pero es difícil pensar que sin esto la gestión del gobierno Febres Cordero

hubiese mejorado mucho, dado el ambiente político constantemente conflictivo en el que tuvo que gobernar.

A mérito de ese gobierno hay que anotar que, a fuerza de autoritarismo, hizo aceptar en importantes sectores económicos la idea hasta entonces rechazada de la apertura de fronteras tanto para los bienes como para los capitales, incluidos sus dividendos, aunque hay que reconocer que las medidas adoptadas fueron relativamente tímidas. Igualmente puso a la orden del día la idea del retiro del Estado en ciertos dominios de actividad, aunque en la práctica esta política no fue aplicada sino exclusivamente a la agricultura campesina. La tercera idea que parece haber avanzado en este período concierne a la necesidad absoluta de la diversificación de las exportaciones, aún cuando en su aplicación se circunscribe al sector agroalimentario.

Con todo, las políticas públicas, adoptadas con espíritu fuertemente pragmático, así como las definiciones del programa de ese gobierno, dan cuenta de una ausencia de designio estratégico, mirando no solamente la gestión de los parámetros de la macroeconomía sino también las implicaciones institucionales de un nuevo modelo de desarrollo económico ².

El gobierno que le sucede, liderado por el presidente Rodrigo Borja (1988-1992), despertó en un primer tiempo un gran optimismo, fundado de una parte, sobre el a-priori que la alianza centrista era políticamente só-

lida y, de otra parte, sobre la capacidad de diálogo y la habilidad negociadora que se le reconocía al nuevo presidente. Este optimismo iba a ser temperado muy rápidamente puesto que la coalición gubernamental no tuvo ni siquiera el tiempo de celebrar su primer aniversario: la Democracia Popular se retiraba del gobierno y rompía su alianza con la Izquierda Democrática, dejando al presidente librado a una oposición que con los días no haría más que extenderse. Esto explica que en junio de 1990, el gobierno haya perdido ampliamente las elecciones legislativas, limitando así toda capacidad de construir alianzas políticas durables y eficaces.

El fracaso de la política "gradual" de austeridad y de ajuste, según la definía el propio gobierno, estaba sin duda inscrito en una estrategia mal adaptada a las circunstancias, al menos sobre cuatro puntos importantes: 1) ella aparecía considerablemente "atrasada" en la sensibilización de la velocidad con la cual las políticas de liberalización habían ganado espacio y legitimación en el nivel internacional; 2) en lo interno, no tomaba en cuenta la dinámica desencadenada por las iniciativas de liberalización que habían ido imponiendo los gobiernos precedentes, aún cuando los procesos en curso hayan sido todavía embrionarios; 3) por lo anterior, no tenía en cuenta el imperativo de puesta en marcha de algunos dispositivos económicos y sobre todo institucionales destinados a asegurar el mediano plazo; 4) parecía desco-

2. Un análisis bastante completo a propósito de este período de la vida política ecuatoriana fue presentado por Yves St Geours, en la revista *Problèmes d'Amérique Latine*, No. 89, París, tercer trimestre, 1988.

nocer que el estado de espíritu de la población era más bien favorable a una política de continuidad clara y perseverante, aún a precio de sufrir las consecuencias por un tiempo y a condición que ella pusiera fin a los interminables golpes de timón, a los virajes oportunistas de las políticas públicas, al "va y viene" permanente en el ejercicio del poder³.

Lo anterior no deja de sorprender si se considera que el partido gobernante, la Izquierda Democrática, pasaba en los años 80 por ser considerado por la mayor parte de los observadores como el "más moderno" del país. Su acción de gobierno indica, sin embargo, que en lugar de profundizar y de mejor desbrozar las pistas abiertas por sus predecesores, terminó por embrollarlas considerablemente. Puede decirse, sin caer en excesos, que en lugar de hacer "dos pasos hacia adelante y uno hacia atrás" como era el caso hasta allí, los términos esta vez fueron invertidos, para dar "un paso adelante y dos hacia atrás". A su paso por el gobierno quedaron en el camino tres ideas-fuerza que daban cuerpo al programa de la social democracia: que el Estado ecuatoriano podía seguir jugando el rol dominante en la economía, que la apertura de fronteras pasaba con prioridad por la integración andina, y que se podía soslayar indefinidamente el imperativo de reformas institucionales en profundidad. ¿Por qué no afirmar que las debilidades cita-

das, unidas a un exceso de cálculos electorales y de compromisos, condujeron a la ID a un tipo de política que no haría más que retardar la creación de las condiciones internas para un despegue económico durable?

La herencia era muy negativa e inmenso el desafío para el sucesor del presidente Borja. Al término de 12 años de un largo y "tortuoso camino"⁴ de ajuste y estabilización, la economía ecuatoriana continuaba sumida en la recesión: entre 1982 y 1991 la tasa de inversión había descendido del 21% al 13% del PIB, el ahorro nacional se había estancado en alrededor del 15% del PIB; el PIB real por habitante había descendido de 1552 dólares a 1020 dólares, el salario real que era de alrededor de 160 dólares en 1980 había bajado a 30 dólares en 1992 y en este año la inflación se situaba todavía alrededor del 50% anual.

De toda evidencia, el tratamiento unilateralmente monetarista de la economía, neutralizado por un manejo político de la misma ("ciclo político de la economía") fundado en cálculos electoralistas que por lo general se mostraron falsos, dejaba al desnudo la insuficiencia del approach de la realidad y la negligencia política en cuanto a las reformas institucionales indispensables en particular la reforma y la reducción del tamaño y funciones del Estado, la privatización de las empresas públicas, la reforma constitucional, los mecanismos de lucha contra la corrup-

3. El "va y viene" de la política en lo que tiene que ver con el ajuste estructural corresponde a la lógica analizada por Jürgen Schuldt en lo que ha llamado el "ciclo político" del ajuste. Véase su libro *Elecciones y política económica en el Ecuador, 1983-1994*, ILDIS, 1994.

4. La expresión es de F. Thoumi et M. Grindle en el libro "La política de la economía del ajuste: la actual experiencia ecuatoriana", FLACSO, Quito, 1992.

ción, etc. A título de ejemplo del carácter contradictorio y anárquico del largo período de "ajuste frustrado" basta con señalar que la burocracia del Estado pasó de 206.000 empleados en 1980 a 425.000 en 1992 (+ 106,3%) y que el número de las empresas públicas aumentó del 116 a 163 (+ 40,5%) en el mismo período.

ELECCIONES PARA UN GOBIERNO PREMATURAMENTE DESPRESTIGIADO

Los candidatos a la presidencia y vicepresidencia en las elecciones de 1992, Sixto Durán Ballén y Alberto Dahik respectivamente, habían prometido durante la campaña electoral una gestión económica alejada lo mismo del "shock económico", malhadado recuerdo del período de Febres Cordero, que del "ajuste gradual" sin gloria del saliente gobierno de Borja.

Algunos días después de haber asumido sus respectivas funciones, precisamente el 13 de septiembre, los flamantes presidente y vicepresidente, encargado este último de la economía, provocaban el estupor de la población, incluida una gran parte de su propio electorado, adoptando un "paquete" de medidas de "shock" relativas principalmente a la devaluación del sucre y al aumento del precio del combustible automotor y del gas. El efecto inmediato fue una pérdida considerable de popularidad y de credibilidad para los recientes vencedores: casi la mitad de sus electores (un 43,4%), encuestados por un diario de Quito, declaraban haberse equivocado y afirmaban que de existir la posibilidad de volver a las urnas ellos no reincidirían por ningún motivo. Por cierto, ese estado de espíritu no iba a modificarse favorablemente por el sim-

ple hecho de que el presidente Durán Ballén asumía personalmente la responsabilidad del decreto de marras, diciendo que le inquietaba más el interés nacional que los riesgos políticos. El nuevo gobierno había partido decididamente con el pie izquierdo y no tuvo derecho al "estado de gracia" que la población acuerda los primeros meses a todo nuevo mandato presidencial.

Por consecuencia, los resultados de las elecciones de mayo 1994 deben ser interpretados bajo el signo del rechazo de la política conducida por el equipo gubernamental a lo largo de los dos años transcurridos y de la consiguiente desafección de los electores. En realidad, a lo largo de la campaña presidencial de 1992, el candidato Durán Ballén que disputó la segunda vuelta había evitado cuidadosamente fomentar el temor entre los electores, y por lo mismo, no había insistido sobre su convicción personal que la única política realista para el mediano y largo plazo consistía en profundizar las medidas de reajuste estructural, principalmente la reducción de los gastos fiscales, la apertura sobre el exterior y la reforma del Estado. Por el contrario, obedeciendo al criterio del cálculo electoral, había multiplicado las promesas de mejoramiento de la situación general del país, augurando múltiples realizaciones económicas y sociales, y despertando con ello el optimismo de una parte del electorado. Sin embargo, el nuevo presidente no solamente sabía que debía operar sobre un terreno minado, sino que el problema más complicado iba a ser la composición de una mayoría presidencial durable, talón de Aquiles de todos los gobernantes que le habían precedido.

Los dos primeros años de su mandato van a reflejar efectivamente la fragilidad política y las vacilaciones de un gobierno improvisado, carente del soporte de un partido poderoso y por lo mismo sujeto a las contradicciones internas propias a un gobierno basado en alianzas políticas coyunturales. Recordemos que en la primera vuelta de las elecciones, la alianza del Partido Republicano (PUR) con el Partido Conservador Ecuatoriano (PCE) aportó a la lista de Durán Ballén apenas un 25% de los votos.

Se puede imaginar que el precipitado y famoso "paquete" de medidas económicas del primer mes de actividad de la nueva administración, no tenía otro objetivo que ocultar las dificultades de las élites llegadas al poder para definir rápidamente un conjunto coherente de políticas. Tal vez buscando cimentar las alianzas recientemente constituidas en una profesión de fe inconfundiblemente liberal.

En efecto, sobre las carpetas más decisivas, y por lo mismo "espinosas", el equipo gubernamental, constituido por tecnócratas y empresarios, arrastraba los pies y retardaba los acuerdos sobre opciones estratégicas. Por lo mismo, el plan de acción del gobierno no será conocido públicamente sino siete meses después del ascenso al poder de Durán Ballén (Agenda para el Desarrollo del Ecuador, Plan de Acción del Gobierno y Reforma del Estado, 1993-1996).

En realidad, no se trataba sino de una versión preliminar destinada a la discusión en el seno del Consejo de Ministros, en la cual, a partir de un marco de referencia muy general bajo el signo de una "nueva vía para el Ecuador" se hacía referencia a cinco

objetivos prioritarios: política social, mejoramiento del servicio público, modernización del Estado, aumento de la producción y de la productividad, estabilidad macro-económica y dinamización de la economía. En todo caso, hasta allí las promesas correspondían al lenguaje habitual empleado por los últimos gobiernos. La estrategia gubernamental no será explicitada sino en abril de 1994, cuando se hace pública la Carta de Intención dirigida por el gobierno al FMI. Se sabía por ella que la deuda externa iba a ser, por fin, negociada, que el gobierno se comprometía a acelerar la "reforma estructural", principalmente la modernización del Estado y las privatizaciones, y que se iba a favorecer la apertura económica al mismo tiempo que se redoblarían los esfuerzos para reducir la inflación. En cuanto a la deuda externa, solamente en mayo el gobierno iba a estar en condiciones de anunciar su negociación con la banca privada internacional.

Mientras tanto, las contradicciones al interior del equipo gobernante habían terminado por minar la frágil mayoría presidencial. La crisis ministerial de julio de 1993 provocaba la modificación casi integral del Consejo de Ministros, cristalizando así la disputa entre el interés de la política económica de los unos (PSC) y los cálculos político-electorales de los otros (PUR/PCE). El propio Ministro de Finanzas se iba a encargar de denunciar "la falta de coherencia entre el frente político y el frente económico, al mismo tiempo que acusaba a los responsables de la política interior de "lentitud deliberada" en el inicio de las reformas y en el manejo de los proyectos de ley de extrema importancia: en primer lugar

el proyecto de modernización del Estado. A su turno, el Secretario General del CONADE, también renunciado, acusaba a los partidos de gobierno, diciendo que la crisis ministerial "está ligada a las relaciones entre los partidos, los cuales tratan de repartirse la torta del Estado" ⁵. Conviene recordar que los partidos en cuestión eran la Unidad Republicana (PUR) del presidente, partido improvisado precisamente para las elecciones, el débil y tradicional Partido Conservador Ecuatoriano (PCE) y el poderoso Partido Social Cristiano (PSC), el cual luego de haber apoyado la candidatura opuesta a Durán Ballén decidió participar, a todas luces de manera muy condicionada, en la composición de la nueva mayoría presidencial.

El PSC había obtenido el más alto score en las elecciones de 1992 (27% de los votos) y aceptaba participar con el gobierno para, sobre todo defender en el seno del gobierno los intereses de los grupos económicos que le acuerdan su confianza; por cierto en primer lugar aquellos de la Costa con base en Guayaquil, pero también para obtener parcelas de poder en el dominio económico y financiero y favorecer así con fondos del Estado a sus representantes en los gobiernos provinciales y municipales.

La ruptura de la alianza oficialista con el retiro del PSC obligó al gobierno a utilizar el expediente ya clásico en el Ecuador que consiste en constituir mayorías con diputados "independientes", en verdad reclutados en los partidos de la oposición por medio de

mecanismos propios de la corrupción. Con ese nuevo soporte político, el gobierno iba a poder, ¡al fin!, aprobar en el último trimestre de 1993 la Ley de Modernización del Estado e instalar en abril de 1994 el Consejo Nacional de Modernización. Sólo a partir de allí podría dedicarse a otras "carpetas" difíciles, por lo demás sin mayor éxito, excepción hecha de la nueva Ley Agraria aprobada en el mes de junio. Por lo demás se ocupará de la gestión cotidiana de medidas de orden económico destinadas a reajustar los precios, a reducir de manera simbólica los gastos fiscales, a ensayar mejoras en la captación de impuestos y el control de la inflación.

No es de extrañar en tales condiciones que, en febrero-marzo de 1994, precisamente dos meses antes de las elecciones legislativas, la crisis política se exacerbara: huelga general de los principales sindicatos, acciones reivindicativas de los sectores indígenas agrupados en el seno de la CONAIE, movilización de municipalidades y de consejos provinciales en su mayoría en manos del PSC (los cuales amenazaban con interrumpir sus actividades), descontento de los gremios patronales... y rumores de golpe de Estado. La crisis iba a ser parcialmente aminorada con el anuncio oficial de un referéndum a propósito de las reformas que el gobierno se proponía hacer coincidir con las elecciones de mayo; táctica, por cierto, destinada a ganar tiempo y a crear una cortina de humo frente a las elecciones próximas. El referéndum fue constitucional-

5. Ver la entrevista acordada a Ecuador Debate No. 32, de agosto de 1994, por los señores M. Ribadeneira y P.L. Paredes. Para la coyuntura de entonces ver el mismo No.

mente rechazado y las elecciones dieron a la población la oportunidad de expresar su desaprobación a la política oficial.

CANSANCIO ELECTORAL Y RECHAZO DEL SISTEMA DE PARTIDOS

Dos fueron los rasgos sobresalientes de esas elecciones: un 20% de los votos fueron declarados nulos y la abstención subió al 26%. Si a esas dos cifras se suman el 4% de votos en blanco, significa que el 50% de la masa electoral no eligió representantes y se puede imaginar perfectamente que no se siente representada por el sistema de partidos tal cual funciona en la actualidad, de lo que se podría deducir un cuestionamiento masivo de la legitimidad de las instituciones democráticas.

Precisamente, en lo que tiene que ver con la abstención, la cifra señalada confirma un fenómeno que viene marcando los procesos electorales desde hace tiempo: en 1979, ella fue de 19,6%, en 1990 de 32,3% y en 1992 de 40,0% para las presidenciales. Todo pasa como si el fenómeno de la marginación política, que involucra al tercio o más del cuerpo electoral, fuese ya un hecho estructural, en paralelo con el fenómeno de la marginalidad económica. No cabe duda que los abstencionistas se desinteresan de un sistema político cuyas instituciones representativas, principalmente los partidos y el Congreso Nacional, están gravemente desacreditados; pero es también muy probable que, instalados en la informalidad, numerosos contingentes de población sobre todo urbana, viven ya efectivamente al margen de toda institucionalidad oficial y han renunciado a

participar en un juego cuyas reglas les parecen cada vez más dudosas. Hay que decir también, que los llamados frecuentes a la no participación en las elecciones, negando legitimidad al Parlamento y proponiendo la creación de "Parlamentos Indios", y "parlamentos populares", deben haber impactado considerablemente en ciertos sectores y contribuido a erosionar un poco más la confianza de la gente en el sistema político.

Mientras los abstencionistas se desinteresan por la suerte de las instituciones democráticas, volviendo la espalda al sistema político vigente, los electores de voto nulo lo condenan y cuestionan su legitimidad. El aumento al doble en relación con las elecciones precedentes, hace del voto nulo de mayo de 1994 un acontecimiento espectacular, que los observadores casi por unanimidad atribuyen a un "efecto de cansancio cívico" acompañado del sentimiento ciudadano que la democracia "no es más apta para resolver sus problemas". El voto nulo provendría de todos los horizontes, desde las personas más alejadas de la actividad política hasta de los militantes más implicados.

Pero más allá de esta constatación general, los resultados revelan otros fenómenos de importancia. Así, se descubre que al anular su voto, importantes segmentos del electorado rehusaron apoyar a los partidos del centro y de la izquierda, decepcionados sin duda de la última experiencia centrista y decididos en relación con esta última a confirmar una desafección que es ya tendencial. El análisis de la distribución geográfica del voto nulo muestra que éste fue más elevado en provincias con alta proporción de po-

blación indígena, donde el discurso anti-sistema de la CONAIE fue bien recibido (en Tungurahua fue de 29,0%). El voto nulo resultó igualmente elevado en las provincias donde las capas medias representan una parte importante de la población: en la provincia de Azuay (con Cuenca, tercera ciudad del país) y en la de Manabí (quinta provincia importante del país).

¿UN PAIS ENTRE LA DERECHA Y EL POPULISMO?

El análisis que sigue de la evolución reciente de las tendencias políticas en el Ecuador, a partir de las elecciones de 1994 debe ser leído to-

mando en consideración dos aspectos. Uno, que se impone una primera relativización: como lo hemos dicho, solamente la mitad del electorado jugó el juego del sistema de partidos en esta última ocasión. Dos: para la comparación con las elecciones precedentes, hemos tomado en consideración exclusivamente los resultados de las elecciones legislativas, puesto que ellas están menos marcadas por los efectos desviantes y coyunturales ligados al caciquismo local (propios de las elecciones en los consejos cantonales y municipales), y también por los elementos carismáticos y "mediáticos" que son propios de las elecciones presidenciales.

Cuadro No. 1
Elecciones legislativas recientes
% de votos por partido

Partido	(T)	1988	1990	1992	1994
PSC	D	12,4	24,1	22,9	26,4
PRE	P	16,3	14,6	14,6	16,9
ID	C	22,7	13,3	9,4	9,9
MPD	I	5,8	5,1	6,5	8,2
DP	C	10,9	10,3	5,5	8,2
APRE	P	4,3	2,2	1,5	5,9
PCE	D	2,1	4,3	6,5	5,6
FRA	P	3,9	4,3	3,5	4,7
PUR	D			18,4	3,9
PSE	I	4,3	8,9	4,2	3,1
CFP	P	8,1	4,4	3,2	2,1
PLR	D	2,7	2,7	1,2	2,1
FADI	I	2,4	2,2	1,1	1,1
LN	I	0,0	1,8	0,9	0,9
UPL	P		0,6		
PCD	P	1,2	0,9	0,7	0,4
PAB	P		0,9		
OTROS		3,1	1,1	0,0	0,0
TOTAL		100	100	100	100

Fuente: Tribunal Supremo Electoral

Como se podía esperar, la coalición presidencial PUR/PCE sufrió una derrota aplastante, tal vez más allá de las previsiones: obtuvo apenas el 9,5% de los votos, muy lejos de su score de 1992 que había sido de 24,9%. Pero el fracaso de los partidos presidenciales, sobre todo del PUR, no significa de ninguna manera que el conjunto de la derecha política haya sufrido una derrota aplastante, puesto que el PSC, íntimamente ligado al gobierno en un primer tiempo para tomar distancia luego de la crisis de 1993 (lo que no significa que no continuó medrando de los lazos que lo unen a los círculos del gobierno) resultó ser el gran ganador, aumentando en tres puntos su votación anterior y afirmándose como el primer partido del país, con el 26,4% de los votos (ver cuadro 1).

El fracaso de la coalición presidencial no favoreció de la misma manera a los partidos de centro, en desgracia luego de sus pasadas experiencias gubernamentales. La Izquierda Democrática, perdedora del poder en 1992, no logró superar el débil score de las legislativas precedentes y quedó reducida a menos de la mitad de los votos obtenidos con ocasión del triunfo de la candidatura presidencial de Rodrigo Borja en

1988. En cuanto a la Democracia Popular, en el poder entre 1979 y 1984, a pesar de sus esfuerzos de modernización recientes, tratando de integrar las nuevas exigencias democráticas y de desarrollo, logró apenas un 8,2% de los electores, aumentando muy levemente.

Las elecciones de mayo lograron en revancha, confirmar la vitalidad del populismo y en primer lugar la del Partido Roldosista Ecuatoriano, el cual se afirma como la segunda fuerza electoral del país, con 16,9% de los votos. Así, el conjunto de fuerzas identificadas como populistas, se acerca estrechamente a un tercio del electorado. El cuadro 2 muestra que son ellas las que más han ganado en las legislativas de este año, puesto que en conjunto recuperaron seis puntos con relación a las elecciones precedentes, al mismo tiempo que superan el score obtenido en 1990. Esta evolución viene a desmentir las previsiones de la mayor parte de aquellos analistas que en los años 80 preveían que con la modernización, el país iba a enterrar definitivamente al populismo. Tales vaticinios estuvieron a la orden del día sobre todo en vísperas del gran triunfo electoral de la socialdemocracia en las presidenciales del 88.

Cuadro No. 2
Porcentaje de votos por tendencia política
(elecciones legislativas)

	1994	1992	1990
Derecha	37,8	48,3	30,1
Populismo	30,1	24,4	26,2
Centro	18,2	16,3	24,1
Izquierda	13,9	10,9	17,7

Fuente: Tribunal Supremo Electoral.

En cuanto a los partidos de la izquierda, a pesar de haber ganado en conjunto, tres puntos en relación a 1992, siguen muy por debajo de su score de 1990, el más alto logrado desde 1979 cuando se produce el retorno democrático. Los resultados eleccionarios muestran por otra parte que la relación de fuerzas cambia en la izquierda: mientras que diversas tendencias políticas han desaparecido, o están en proceso de desaparición (caso del FADI), un reagrupamiento del electorado se produce esta vez alrededor del Movimiento Popular Democrático, partido maoísta en sus orígenes, que adopta más en sus discursos y en su práctica características del populismo. El "salto adelante" del MPD en las elecciones de mayo puede explicarse igualmente en función del rol de "núcleo duro" que ese partido viene asumiendo en la resistencia a las políticas neo-liberales. En efecto, por este posicionamiento, que entre otras cosas lo llevó a encabezar la fuerte movilización de los sindicatos del magisterio en 1993, el MPD recibió el apoyo de los opositores a las privatizaciones así como a la reducción/modernización del Estado. En cuanto al Partido Socialista Ecuatoriano, que ocupa el segundo lugar en la izquierda, no ha logrado repensarse de la catástrofe electoral de 1992, ocasión en que pasó de 8,9% de los votos a solamente 4,2%. Sigue perdiendo votos y no logra en mayo más que 3,1%.

UNA GEOGRAFIA ELECTORAL CONTRASTADA: "MOVILIDAD" DE LOS UNOS Y "FIJACION" DE LOS OTROS

Los comportamientos políticos ligados al conocido clivaje histórico entre Sierra y Costa permitieron todavía en

1979, hacer triunfar a nivel nacional una candidatura presidencial "costeña" de perfil populista así como en un pasado más lejano podía triunfar una candidatura típicamente "serrana", de derecha tradicional opuesta al "liberalismo costeño". No es más el caso en la actualidad. Lo nuevo es que las dos tendencias políticas dominantes en el nivel nacional -la derecha y el populismo- han devenido "móviles" geográficamente hablando, y si se puede constatar todavía un cierto clivaje en el plano electoral entre Sierra y Costa. Como se verá más adelante, ello no corresponde más a las mismas connotaciones de antaño.

En realidad, han cambiado los tiempos en que poblaciones costeñas poco articuladas internamente, carentes de identidad y en búsqueda permanente de un elemento aglutinador alrededor del cual construir una nueva cohesión social, constitulan el terreno abonado para políticos providenciales y para movimientos sin claras definiciones ni ideologías ni programáticas. En tal contexto, el populismo se había constituido en la Costa como la cultura política dominante, poniendo por delante un discurso de rechazo de un poder instalado "arriba", en los Andes, largo tiempo monopolizado por una anquilosada oligarquía de la tierra, con todo lo que se podía imaginar además a propósito de su mundo, del mundo andino, de los indios...

Esa sociedad costeña ha cambiado considerablemente en particular durante el período petrolero, en el que se impulsó una fuerte modernización. Ella se ha venido estructurando socialmente y por lo mismo las bases culturales del populismo han cambiado. Si se quisiera hoy en día asimilar, por razo-

nes estructurales, un sector social que sería proclive al populismo, habría que ir a buscarlo en la población urbano-marginal en Guayaquil o de otras grandes ciudades. En todo caso, el populismo costeño no posee actualmente potencial, él solo, como para hacer triunfar una candidatura presidencial. La derecha le ha salido al paso con fuerza y además el "frente de rechazo" de los abstencionistas y del voto nulo contribuyente a fragilizarlo en sus antiguos dominios. En contrapartida, el populismo a su vez se hace más "nacional" puesto que está ganando posiciones en la Sierra como lo veremos enseguida.

Si es cierto que las tendencias populistas en conjunto obtuvieron sobre la Costa una mayoría nacional de 52% de los votos emitidos, y si es cierto también que hasta allí la derecha encontraba dificultades para convertirse en una corriente política importante, las últimas elecciones confirman que las posiciones de derecha se han implantado muy confortablemente: alrededor del 60% de su electorado es costeño. Este "deslizamiento" de la derecha hacia la región costera encuentra, sin embargo su contrapartida en un movimiento de sentido inverso realizado por el populismo, el cual sin dejar de tener una posición fuerte en la Costa, ha iniciado desde 1990 la conquista del electorado serrano, ganando posiciones en apariencia durables. Este fenómeno electoral inédito parece obedecer a razones múltiples entre las cuales destacaremos sólo algunas.

No es seguramente el azar lo que hace que el partido fundado por el Presidente Roldós (PRE) avance con más fuerza en la Sierra; ello viene a recordarnos que fue ese presidente el iniciador de una política de conjunto

orientada a la población indígena, y que en gran parte por ello sigue siendo una figura emblemática cuya referencia beneficia al partido. El otro elemento que me parece esencial en la explicación del fenómeno tiene que ver con el proceso que liga, siempre en el medio andino, la bancarrota de los partidos de centro y también de la izquierda a los cambios estructurales ocurridos en años recientes. El 44,1% de los votos emitidos en favor de las tendencias que pueden ser calificadas de populistas en la Sierra, debe ser considerado como significativo: estaría dando cuenta de un proceso acentuado de descomposición de las viejas estructuras andinas al impacto de los procesos modernizadores, el cual ha erosionado el terreno tradicional de los políticos. ¿Inmersa en un proceso durable de descomposición/recomposición estructural, la sociedad andina, a la búsqueda de nuevas referencias, vuelve "esperanzada" los ojos hacia el populismo?

Si la derecha y el populismo se han movido geográficamente, no es lo mismo para las tendencias centristas y para el conjunto de la izquierda. En realidad, el centro y la izquierda aparecen como "golpeados" por una suerte de "fijación geográfica", pues lo que les resta de electorado se encuentra hoy más que nunca "atrincherado" en la Sierra. Sobre la Costa, estas tendencias logran a duras penas conservar entre un cuarto y un tercio de su electorado, configurándose algo así como un "impasse estructural" que les impidiera concitar el apoyo popular. Lo que es más grave, ambas tendencias aparecen desde ahora seriamente amenazadas en sus propios espacios tradicionales, pues allí sus soportes eran antiguas

estructuras sociales que el neo-liberalismo está socavando con fuerza.

La derecha y el populismo tienen entonces una expresión nacional relativamente estabilizada, favorecida por sus avances respectivos recientes sobre la Sierra y la Costa y es muy difícil pronosticar que si el electorado, por el momento "ausente" decide volver a las urnas, deje de votar en el futuro sea por la una o por la otra tendencia. Las candidaturas presidenciales deberían, en una segunda vuelta, polarizarse entonces en tales términos, puesto que los espacios ocupados por la una y por la otra tienden a devenir estables y no dejan lugar para pensar en grandes sorpresas electorales.

¿DE LA BANCARROTA A LA REFORMA DEL SISTEMA POLÍTICO?

He aquí el sistema político ecuatoriano: en los años que vendrán no podrá contar, para reforzar su credibilidad y hacer progresar la democracia, sino con las fuerzas de derecha y del populismo. Puede decirse que por el momento el populismo "acecha" la bancarrota de la derecha, pero la llegada de su hora no parece tan próxima puesto que si el gobierno Durán Ballén, como consecuencia de las debilidades anteriormente señaladas, no logra enrumbar al país sobre el nuevo y coherente modelo de desarrollo, a la derecha le queda aún como "reserva" el PSC. El Partido del ex presidente Febrés Cordero es, en efecto, el único ganador del período actual y se prepara

de manera activa a la sucesión⁶. La derecha tendría, de tal suerte, cuatro años de gobierno delante de ella; en hipótesis tiempo suficiente como para crear las condiciones del "despegue" de la economía así como de una reforma del sistema político. La cuestión es: ¿tendrá éxito?

La alternancia populista se abriría entonces en el caso que la derecha no sea capaz de asegurar un desarrollo durable, lo cual marcaría al mismo tiempo la bancarrota de la "democracia a la ecuatoriana", muy simplemente porque los tiempos, realísticamente hablando, no son para populismos y el curso de los acontecimientos no podrían deparar en tal caso sino dos soluciones alternativas: o bien el "deslizamiento" de un régimen populista hacia un autoritarismo estilo Fujimori; o más simplemente, la instalación de una dictadura sin máscara. Lo uno o lo otro, dependerá en gran parte de la manera como se haga la convergencia entre las diversas tendencias populistas, en particular aquellas de izquierda que, ideológicamente desorientadas, no tienen por ahora otro leitmotiv que la resistencia al cambio neoliberal, con aquellas corrientes contestatarias que emergen de la desarticulación social en el campo y de la desesperanza de los pobres urbanos.

Lo anterior quiere decir que la afirmación del sistema democrático en Ecuador no puede ser disociado del éxito en el plano económico. Pero no nos equivoquemos: cuando afirmamos esto no queremos decir que considere-

6. El PSC representa en la derecha el sector más moderado sobre el plano político, y se ha esforzado en una redefinición de su ideología y los contenidos de una nueva identidad política de la derecha. Integra a una crítica radical del Estado, elementos político-ideológicos de audiencia popular, como por ejemplo la problemática de la multi-etnicidad.

mos unilateralmente prioritario el simple desafío de medidas económicas aceptables. La cuestión es más compleja: el país no puede dotarse de un nuevo modelo de desarrollo sin un consenso político durable y esto pasa por una profunda transformación de los comportamientos políticos, por la reforma del sistema de partidos y por una revisión de los actuales equilibrios constitucionales.

A propósito del sistema político, el consenso es general para señalar su impasse; pero en revancha, la clase política no parece interesarse mucho por una reforma profunda de la Constitución de 1978 ni de la legislación electoral, no de aquella referente a los partidos políticos⁷. Esto, sabiendo que el sistema imaginado en ese entonces lejos de asegurar las condiciones favorables a la creación de consensos positivos, poniendo por delante el interés nacional, dejaba la puerta ampliamente abierta a la "neutralización recíproca" de las fuerzas políticas, multiplicando los factores de fragmentación partidista, impidiendo la estabilidad de las mayorías parlamentarias, dejando, en fin, vastos espacios de conflicto entre los poderes del Estado (principalmente entre el Ejecutivo y el Parlamento). Se conoce además cómo, todo esto no hace sino favorecer la irresponsabilidad de los representantes del pueblo y cómo ello representa un terreno que promueve la corrupción política.

Se puede, por cierto, interpretar el sistema creado en 1978 como correspondiente a una cultura política propia

de un conjunto nacional desarticulado (sobre el plan espacial, social, y cultural), que da prioridad a los mecanismos informales y clientelistas en la solución de conflictos, en detrimento de las reglas del juego institucional. Pero el sistema en vigor debe también ser interpretado como la manifestación de una "deriva democrática" (en un sentido populista), tal vez explicable por el entusiasmo del "retorno de la sociedad civil" a fines de los 70, pero que evidentemente no por eso debe justificarse. A título de ejemplo de la Constitución aprobada en 1978: ¿Cómo calificar de "presidencial" un sistema donde el Ejecutivo no tiene ni siquiera el derecho de fijar el salario mínimo (negociado por cierto con los interlocutores sociales), de convocar a plebiscito o de gobernar por decreto en caso de urgencia? ¿Cómo aceptar que la Constitución deje espacios de maniobra tales que el Parlamento se permita nombrar una Corte Suprema de Justicia "paralela" a la existente? ¿Que en el espacio de un año de gobierno los parlamentarios interpielen, muchas veces por bagatelas, una veintena o una treintena de ministros del gobierno? ¿Cómo asegurar la seriedad y la continuidad de la función parlamentaria cuando los mandatos de los diputados deben renovarse cada dos años, determinando una suerte de "feria electoral"? ¿Cómo asegurar al presidente de la república una mayoría estable con una "proliferación" de partidos políticos, algunos de ellos estrictamente "funcionales", los cuales nacen, desaparecen

7. La sola reforma al sistema político que entusiasma al actual gobierno, es aquella que permite la elección de parlamentarios independientes, al margen de los partidos, quienes serían esenciales para la constitución de mayorías presidenciales.

o se dividen en función de los intereses personales y coyunturales de las personas, de familias o de grupos económicos diversos? En fin, ¿cómo integrar las demandas de autonomías étnicas en un Estado congénitamente centralista y unitario?

CONCLUSION

El sistema institucional creado en 1978 ha sobrevivido de cierta manera gracias a su propia debilidad; puesto que es contradictorio, está impregnado de "democratismo" y contiene los gérmenes de la irresponsabilidad política, de la transgresión de las normas y de la ética, elementos todos ellos que actúan en el sentido de su perversión. En el fondo, tal sistema fue concebido no tanto como un instrumento destinado a superar las carencias de integración nacional o la precariedad de la cohesión étnica y territorial, sino por el contrario, como un sistema que debía ser útil a los intereses de particularismos muy diversos.

Se puede concluir, entonces, afirmando que la crisis ecuatoriana no es tanto un problema de mecanismos de gestión de la economía sino sobre todo un problema de orden institucional y de cultura política. Es sin duda atacando con prioridad a la reforma del sistema político y de las instituciones del Estado, a la reforma de los mecanismos de la regulación social y de la formación general de los ciudadanos que un gobierno puede tener éxito en

el desafío de superar la crisis. La democracia "por inercia" no podrá sobrevivir indefinidamente a los avatares de un ajuste tortuoso y desmoralizante.

Post Scriptum

El artículo aquí publicado fue escrito a fines de 1994⁸. Acontecimientos importantes se produjeron en el lapso transcurrido. Entre los más importantes, sin duda, la guerra con el Perú y posteriormente el juicio político y la fuga al extranjero del Vice-presidente Dahik. No es mi intención entrar a analizar estos acontecimientos ni tampoco las múltiples escaramuzas en torno a los proyectos de reforma del gobierno del presidente Durán Ballén. Escribo estas notas reaccionando a la manera como se ha precipitado el proceso pre-electoral en lo poco que va corrido de este año. A la distancia era difícil imaginar que la "desregulación del acceso a las candidaturas", como lo llama Ecuador-Debate, iba a dar origen a tal proliferación de candidaturas.

Independientes a la presidencia de la república (seis al menos dadas por seguras en la primera semana de febrero), señalando la profundidad del descreimiento ciudadano en los partidos políticos.

Si bien es cierto la mayor parte de las candidaturas independientes emergen en un abanico que va del centro a la izquierda; creo que es bueno cuidarse de una asimilación rápida de esos potenciales electorales, a un au-

8. El texto de referencia es la traducción de un artículo publicado en "Elections et démocratie. Amériques Latines-Caraïbes" de D. van Euwen y Yolande Pizetty (Coord.). Institut d'Etudes Politiques d'Aix en Provence, CREALC, Francia, 1995.

mento considerable de los chances del populismo como para acelerar su acceso al gobierno, lo que vendría a contrariar la hipótesis que consiste en acordar un chance más a la derecha bajo la conducción del PSC. Me parece que la capacidad de las candidaturas propiamente populistas (del PRE y del APRE) de aglutinar el electorado que votará por las diferentes otras candidaturas independientes está limitada por dos handicaps mayores. El primero es que no existe el líder carismático, único capaz de unificar la dispersión reinante; de cruzar las clases sociales al mismo tiempo que las abarca; de tener la misma capacidad de convocatoria en la diversidad de espacios de la geografía electoral. Para acortar: Bucaram es demasiado guayaquileño mientras que Frank Vargas Pazzos es demasiado izquierdista. El otro handicap fundamental es que la referencia casi mágica al Estado todopoderoso, desde el cual se podía todo, que era propia de las candidaturas populistas de antaño, es hoy poco útil en general y en el caso particular del Ecuador tal vez mucho menos, dado el desprestigio de las instituciones y la considerable incapacidad de ineficiencia que muestra la administración desde hace ya mucho tiempo. Hay que considerar también que la prédica liberal y su crítica del Estado en todos estos años debe necesariamente haber ganado espacio en el espíritu de los electorales.

Suponiendo que candidatos como Rodrigo Paz, Freddy Ehlers o Frank Vargas logren cifras de votos significativas como para situarse en una segunda posición, nada indica que en la segunda vuelta electoral el conjunto de esos votos vaya a vaciarse en una

de esas tres personas. La DP con su candidato, el banquero Rodrigo Paz, debió reconocer ya en 1995 la imposibilidad de una candidatura de "gran frente político" y el partido cada vez más sensible a integrar las nuevas exigencias para el desarrollo determinadas por la globalización de la economía, estaría menos dispuesta que nunca a juntar sus votos para apoyar un candidato que no podría levantar otra cosa que un programa demasiado "híbrido" o izquierdizante como para ser viable.

El éxito de la candidatura de Frank Vargas Pazzos está desde ya comprometido por la fragilidad del apoyo que recibirá de los electores de la ID. partido en plena crisis y dividido precisamente en relación con la candidatura presentada por el APRE. El abandono por su compañero de lista no es más que lo visible del malestar reinante en la tienda socialdemócrata. La sorpresa podría venir de la candidatura de F. Ehlers (si se tiene en cuenta los primeros sondeos de opinión) pero ella también aparece comprometida en su nacimiento, pues se la está estigmatizando desde ya como la "candidatura del extranjero" (peruana) y es difícil que un electorado, tan sensible a los temas nacionalistas como el ecuatoriano, acepte la idea de tener un presidente casado con peruana. El ruido que se hace en ambos lados de la frontera en torno a este asunto, que debería quedar circunscrito al ámbito familiar, es de muy mal augurio.

Ningún reagrupamiento de fuerzas consistente ideológicamente, ni ningún programa político viable, ha visto la luz en el amplio espectro que va del centro a las diversas y dispersas izquierdas,

y a tres meses de las elecciones de mayo la perspectiva política se vislumbra de la misma manera que en junio de 1995 la veía el jurista Fabián Corral cuando decía "la pelota está en la derecha, la iniciativa la tiene este sector en el tratamiento de los temas fundamentales: neoliberalismo, reforma del Estado y modernización. El centroizquierda no tiene una propuesta de país y se han quedado en el "no" (El Comercio, 18/6/95).

En la derecha, el PSC ha continuado ganando puntos y muestra una impresionante capacidad para ganar vic-

torias pese a sus debilidades y a los cuestionamientos venidos de las propias esferas de la derecha. De acusado se transforma en acusador, de "asociado" al gobierno de Durán Ballén, hará de éste y de sus seguidores sus mejores aliados para la segunda vuelta y, más los votos que vendrán desde el centro (electores que quieren la continuación de las reformas) y los votos del electorado que juega "a ganador", tiene todas las chances de imponer su candidato. Hay que tener en cuenta que a la idea de las reformas, la opinión pública es ya muy receptiva y la más clara.

Edgar Freire

**Los libros
en mi vida**

La historia que nunca se contó



CIRCULO DE LECTORES

LOS LIBROS EN MI VIDA: Un texto provocador. Es el producto de una inquietud que Edgar Freire ha venido insistiendo desde que, hace 30 años, comenzara su andadura profesional tras los mostradores de librería CIMA.

En este volumen alteran políticos y periodistas, escritores y diplomáticos, profesores y economistas, investigadores y hasta desconocidos lectores que contestan a las 8 preguntas propuestas por el librero de la CIMA.

Derechos de propiedad de la tierra: una aproximación desde la economía, *Javier Alvarado*. La ley de tierras y los límites al derecho de propiedad, *Laureano del Castillo*. Conflictos intercomunales en los Andes centrales, *Hans-Joachim Picht*. La degradación de los recursos en economías rurales empobrecidas en el noroeste argentino, *Raúl Paz*. Dinámica de los campesinos-artesanos en la sierra central del Ecuador, *Luciano Martínez*. Indicadores de sostenibilidad para la agricultura andina, *Manuel Glave y Javier Escobal*. El diseño de intermediarios financieros exitosos: evidencia de Indonesia, *Claudio González Vega y Rodrigo Chaves*. ¿Qué sabemos sobre la cordillera del Cóndor? Recursos, problemas y potencialidades, *Carlos Frías Coronado*.

Suscripciones: Perú S/. 60. Latinoamérica US\$ 38, Norteamérica y Europa US\$ 40. Asia y Africa US\$ 42. Pedidos y giros a nombre de CEPES. Av. Salaverry 818, Lima, Perú. Teléfono: 433-6610, Fax: (51-1) 4331744.

DISEÑO 6

Verano de 1996

EDITORIAL: Un destino original, *Cocambo*. ENSAYOS: Iberoamérica en un tiempo de culturas, *Abel Posse*. Una utopía sui generis - "Ciudadela" de Saint Exupéry, *Sergio Sarti*. Sudamérica: el factor histórico, *Pedro Godoy*. Globalización o grandes espacios, *Alberto Buela*. La civilización moderna, *José Luis Ontiveros*. Música: kitsch y cultura, *Eduardo Pinzani*. De regreso al ombligo, *Galo Vaca Acevedo*. Lección jurídica de España en Indias, *Matías Suárez*. TEXTOS: Reflexiones sobre la tradición y el tradicionalismo en la historia de Chile, *Mario Góngora*. COMENTARIOS: Homenaje a Vintila Horia: La trampa, *Sir James Goldsmith*.

Suscripciones: Envíos de dinero desde el extranjero por suscripciones a nombre de Alfredo Mason, a través de Western Union, a la Casilla 3198 (1000) Buenos Aires Argentina.

